

Santiago, tres de enero de dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

Ante el Juzgado de Letras de Angol, por parte del Ministro en Visita Extraordinaria, señor Álvaro Mesa Latorre, se investigó el delito de Secuestro Calificado de Patricio Rivas Sepúlveda. Dicho instructor condenó a Juan Carlos Balboa Ortega, en calidad de autor, a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales, por el delito de secuestro calificado de la referida víctima, en su carácter de lesa humanidad, perpetrado el día 31 de agosto de 1975, en la comuna de Angol

Asimismo, en la parte civil, acogió la demanda interpuesta por el abogado Sebastián Saavedra Cea, en representación de Patricia Elena y Marcela Paz, ambas Rivas Morales, en contra del Fisco de Chile, condenándolo a pagar a las mencionadas, como indemnización de perjuicios, las sumas de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), para cada una de las referidas actoras.

Recurrido de casación en la forma y apelación por parte del condenado, la Corte de Apelaciones de Temuco, en pronunciamiento de trece de octubre de dos mil veintitrés, rechazó ambos recursos y confirmó la decisión en todos sus extremos.

En contra de esta última decisión, la defensa del condenado, interpone recurso de casación en el fondo, el cual, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, se procedió a examinar su admisibilidad

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, el recurrente, en su arbitrio, postula como causal de casación de fondo, aquella prevista en el numeral 1° del artículo 546 del



Código de Procedimiento Penal, el cual lo relaciona con los artículos 63, 68 inciso 2°, 141 inciso 1° y 3°, todos del Código Penal y el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

En particular, reclama sobre la decisión adoptada por el sentenciador de primera instancia, confirmada por los jueces de segundo grado, en orden a considerar concurrente la agravante del artículo 12 N° 8 del Código Punitivo, ello debido a que, en concepto de los sentenciadores del grado, un delito de lesa humanidad bien puede ser cometido por un particular y, en este caso, el carácter de funcionario público del autor, le permitió actuar con resguardo y obtener impunidad. Así, estima el recurrente que se ha visto afectado el principio relativo al *non bis in ídem*, pasando por alto lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal y, en este escenario, aplicando la pena al sentenciado, se compensó dicha agravante con la minorante del artículo 11 N° 6 del mismo texto legal, sancionándolo así en un tramo superior al que habría obtenido de solo considerar la atenuante.

En consecuencia, pide anular el fallo y dictar uno de reemplazo en que se enmiende la aplicación errónea del derecho de los jueces del fondo, fijando, de conformidad a la infracción mencionada, una pena de no más allá de tres años y un día, ya que concurre una circunstancia atenuante y ninguna agravante más allá de las del tipo referido, concediéndole a mi representado el beneficio de la libertad vigilada intensiva de conformidad a la ley 18.216 en el evento que le quede, de acuerdo a la pena que se invoca algún tiempo para estar controlado por esa ley o se le ponga inmediatamente en libertad.

**SEGUNDO:** Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, *elevado un proceso en casación de fondo, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquéllas contra*



*las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos que se establecen en los incisos primeros de los artículos 772 y 776.*

Luego, el inciso primero del artículo 772 del mismo cuerpo legal, establece que, *el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 1) Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y; 2) Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.*

De esa manera, es necesario que el recurrente señale la manera en cómo el o los errores de derecho que denuncia, han tenido influencia en lo dispositivo del fallo, lo que en este caso, por las razones que se expresarán, no se estima concurrente.

**TERCERO:** Que, el yerro denunciado dice relación con la determinación de penas, asegurando que la compensación efectuada por los sentenciadores de instancia produjo un error en cuanto a la fijación de la sanción ya que, en su concepto, al existir una sola atenuante, el juez habría impuesto una pena inferior a la aplicada. En este caso, tal aserto no es efectivo ya que, tal como se expresa en el considerando 24° del fallo de primer grado, la pena asignada al delito de secuestro calificado corresponde al presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, cobra aplicación el artículo 68 del Código Penal que, en el escenario en el que el recurrente basa su protesta, habiendo una sola circunstancia atenuante, el juez no aplicará el grado máximo, cual es, en este caso, el rango superior de los tres grados. En cambio, en la especie, se aplicó una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, la sanción está ajustada al tramo legal e inferior, por ello, aun acogiendo la posición de la recurrente, el supuesto yerro no ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo, lo cual conduce a su declaración de inadmisibilidad.



**CUARTO:** Que, lo anotado precedentemente, permite sostener que el dictamen refutado no ha incurrido en ninguna de las hipótesis que se señalan en el literal primero del artículo 546 del ordenamiento procedimental penal, que tornan procedente la invalidación del fallo y, aun así, incluso de aceptarse las alegaciones del recurrente, tal yerro no ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo lo que conduce necesariamente al derrotero ya anticipado.

Y, de conformidad, además, con lo dispuesto en las normas citadas y en los artículos 535 del Código de Procedimiento Penal y, los artículos 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara **INADMISIBLE** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado, señor Juan Carlos Manns Giglio, en representación de Juan Carlos Balboa Ortega, deducido contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco de trece de octubre de dos mil veintitrés.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

**Nº 252.443-2023.**





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Jean Pierre Matus A., María Soledad Melo L., Ministro Suplente Hernán Alejandro Crisosto G. y los Abogados (as) Integrantes Ricardo Alfredo Abuaud D., Pía Verena Tavorari G. Santiago, tres de enero de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a tres de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

